

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ROSAURA FRANCO ARANGO
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-002-2018-00840-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de sobrevivientes, causación, principio de la condición más beneficiosa, test de procedencia - sentencia SU-005 de 2018.
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, dieciocho (18) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”; y surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **ROSAURA FRANCO ARANGO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 031**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir el recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia absolutoria que profirió el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 16 de diciembre de 2019, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales hoy COLPENSIONES, entre el 28 de diciembre de 1977 y el 30 de abril de 2008, reuniendo un total de **944.57** semanas cotizadas.

No obstante, en la historia laboral del referido afiliado CORTES SÁNCHEZ, también se evidencia una serie de periodos no validados por moras patronales e inconsistencias, para un total de **18.71** semanas, y también tiene en su haber un total de **100.71** semanas de tiempo publico a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.

Que al sumarse ese tiempo cotizado, con los periodo en mora, y el tiempo publico no cotizado, se reúne un gran total de 1.063,99 semanas, de las cuales mas de 300 semanas fueron acreditadas antes del 1° de abril de 1994.

Señala el escrito introductorio, que el afiliado ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, falleció por causas de origen común el día 9 de octubre de 2014, y lo sobrevivió su compañera permanente, la aquí demandante ROSAURA FRANCO ARANGO, persona con quien convivió en forma permanente e ininterrumpida bajo unión marital de hecho, desde el año 1975

hasta la fecha de fallecimiento, y al interior de esta unión se procreó un hijo de nombre EDUAR ALBERTO CORTES ARANGO, mayor de 25 años en la actualidad.

Y finalmente indica el escrito introductorio, que con ocasión al fallecimiento del afiliado CORTES SÁNCHEZ, la demandante radico varias solicitudes de corrección de historia laboral del afiliado fallecido para que le fueran tenidas en cuenta la totalidad de semanas cotizadas, y luego procedió a elevar solicitud pensional ante COLPENSIONES, quedando así agotada la vía administrativa.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que a la señora ROSAURA FRANCO ARANGO le asiste derecho a una pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del afiliado fallecido ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, lo anterior en aplicación del principio constitucional de la condición mas beneficiosa, en consecuencia, SE CONDENE a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, al reconocimiento y pago de esta prestación económica en forma retroactiva, junto con los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, y/o la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

COLPENSIONES a través de su apoderado judicial dio respuesta oportuna a la demanda (fls. 59 al 65) manifestando frente a los supuestos fácticos narrados por la activa, que son ciertos aquellos que aluden al fallecimiento del afiliado ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, tiempo público laborado al servicio del Ministerio de Defensa Nacional conforme la prueba documental allegada al plenario, así como la solicitud pensional presentada por la demandante, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que denominó:

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A LA DEMANDANTE; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER INTERESES DE MORA; PRESCRIPCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN; COMPENSACIÓN; LA GENÉRICA; y DESCUENTOS EN SALUD”.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación, el JUEZ SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN en audiencia pública de juzgamiento, celebrada el 16 de diciembre de 2019, ABSOLVIÓ a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra por la señora ROSAURA ARANGO FRANCO, declarando probada la excepción de *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A LA DEMANDANTE*, absteniéndose de imponer costas procesales en primera instancia.

Como fundamento de su decisión, estimó el juez de primer grado que el afiliado fallecido ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, no dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios, pues si bien, contaba con un considerable número de semanas cotizadas, estas le fueron insuficientes para causar una pensión de vejez en los términos del art. 9° de la Ley 797 de 2003, pues solo reunió 944,57 semanas, de las 1.300 semanas exigidas por dicha normativa, tampoco era beneficiario del régimen de transición previsto en el art. 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con 39 años de edad y/o 616 semanas, al 1° de abril de 1994, incluido allí el tiempo público al servicio del Ministerio de Defensa Nacional.

Y en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, bajo el primigenio art. 46 de la Ley 100 de 1993, indicó el fallador de instancia, que no resultaba factible la causación del derecho pensional bajo esta opción, toda vez que este afiliado, falleció después del año 2006, es decir, por fuera del rango de temporalidad fijado por la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, y tampoco tenía en su haber las 26 semanas de la Ley 100/93.

Finalmente manifestó el a quo, que a pesar del doble salto normativo permitido por la Corte Constitucional, para la aplicación del acuerdo 049 de 1990 que permite la causación del derecho a una pensión de sobrevivientes con 300 semanas de cotización, la demandante ROSAURA FRANCO ARANGO no acreditó las condiciones exigidas en el TEST DE PROCEDENCIA contenido en la sentencia SU-005 de 2018, toda vez que las condiciones de salud de la demandante y el causante no se lograron acreditar en el plenario.

VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Su apoderado judicial solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado, al considerar que el afiliado fallecido ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ si dejó causado el derecho pensional a favor de su compañera permanente supérstite, lo anterior, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa que permite un doble salto normativo al acuerdo 049 de 1990.

Señala que en el *sub lite* si se satisfacen las condiciones establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018, pues el estado de salud de la demandante es notorio y evidente, así lo pudo evidenciar el juez de primer grado, quien adelantó la práctica del interrogatorio de parte en atención a tal condición, expone también el recurrente, que para la fecha en que falleció el causante, la aquí demandante contaba con 75 años, es decir, se encontraba dentro del grupo de la vejez, reuniendo así la primera condición del test de procedencia.

Aduce la alzada, que si bien es cierto la demandante ha realizado manualidades para solventarse económicamente, tal actividad no cubre la totalidad de sus necesidades básicas, cumpliéndose así la segunda condición, pues la carencia de esta pensión, si afecta la calidad de vida de la demandante, pues era el causante quien sostenía ese hogar.

En cuanto a la tercera y cuarta condición del test de procedencia, afirma que estas también se encuentran satisfechas, pues según lo relataron los testigos, la demandante dependió del causante hasta la fecha en que este falleció, y la no cotización del afiliado en sus últimos años de vida, se debió a su deteriorado estado de salud, y precaria situación económica.

También da por probada la quinta condición del test de procedencia, asegurando que la actora, si efectuó en forma oportuna la reclamación pensional ante COLPENSIONES, pero esta prestación le fue negada sin siquiera hacer el análisis legal y jurisprudencial frente al principio de la condición más beneficiosa.

Y finalmente, en relación con el requisito de convivencia mínima, expuso que la demandante si logró acreditar tal exigencia legal, pues la unión marital de hecho entre estos compañeros, inició en el año 1975 y perduró hasta el año 2014 cuando falleció el causante, que al interior de esa unión se procreó un hijo en común, y fue el causante la persona que ayudo a levantar los demás hijos que tenía la demandante de una relación pasada, y tampoco puede perderse de vista que la demandante, durante varios ayudo al causante a la construcción de una pensión de vejez, misma que se vio truncada por la enfermedad y posterior muerte del señor CORTES SÁNCHEZ

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, los apoderados judiciales de ambas partes presentaron alegatos de conclusión en segunda instancia.

La apoderada judicial de la demandante, Dra. Catalina Toro Gómez, solicita la revocatoria de la sentencia de primer grado, para que en su lugar se acceda a la pensión de sobrevivientes deprecada en aplicación del principio de la condición más beneficiosa con remisión al acuerdo 049 de 1990, y expone las razones por las cuales considera que la demandante, si reúne todas y cada una de las cinco condiciones establecidas por la Corte Constitucional en el Test

de Procedencia de la sentencia SU-005 de 2018, también insiste en el reconocimiento y pago de intereses moratorios, y anexa las historias clínicas de la demandante y el causante.

A su turno, la apoderada judicial de COLPENSIONES, Dra. Leidy Verónica González López, portadora de la T.P. N° 196.444 del C.S. de la J., expone que en el presente asunto no es posible entrar a reconocer una prestación económica sin estar debidamente ajustada a la Ley, toda vez que el afiliado fallecido no acreditó las 50 semanas exigidas en los 3 años anteriores a la fecha su muerte, esto es entre el 9 de octubre de 2011 al 9 de octubre de 2014.

Y en cuanto a la aplicación del principio de la condición ms beneficiosa, manifestó que de conformidad con la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL4650 de 2017, no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de este principio, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso, esto es, la Ley 100 de 1993 en su versión original, pero el afiliado fallecido tampoco reúne la densidad mínima de cotizaciones allí exigida.

A la referida apoderada judicial, se le reconoce personería para actuar en los términos del memorial de sustitución poder allegado al plenario.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. -Pensión de sobrevivientes, causación, aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia pensional. Teniendo en cuenta los puntos objeto de apelación, mismos que delimitan la competencia de esta Sala en la segunda instancia, los problemas jurídicos estriban en dilucidar, si el afiliado fallecido ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, dejó causado el derecho a una pensión de sobrevivientes a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa.

Y en caso afirmativo, pasará la Sala a determinar si la demandante ROSAURA FRANCO ARANGO, logró acreditar los requisitos legales para ser considerada beneficiaria de la prestación económica que por esta acción judicial reclama, la fecha de disfrute pensional, el retroactivo adeudado, y la procedencia de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 o en su defecto la indexación de las condenas.

Para el análisis del caso y en los términos del artículo 16 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual precisa que las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato, las disposiciones llamadas a regir el presente asunto son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

Valga la pena advertir que en el presente asunto no resultan objeto de controversia los hechos relativos a:

- *La muerte del afiliado ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, insuceso acaecido el 9 de octubre de 2014, según lo acepta COLPENSIONES en su respuesta a la demanda.*
- *Que según la historia laboral más actualizada aportada por COLPENSIONES en medio magnético, el afiliado ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ registra un total de 944,57 semanas cotizadas al sistema general de pensiones entre el 28-12-1977 al 30-04-2008.*
- *Que según el certificado de información laboral para bono pensional expedido por el ministerio de defensa nacional, visible a folios 26 al 28 del plenario, afiliado ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ registra un tiempo público*

como soldado entre el 16-02-1973 al 30-01-1975, equivalente a 102 semanas.

- *Y finalmente esta probado, que a la demandante FLOR ROSAURA FRANCO ARANGO, en su calidad de compañera permanente superviviente del afiliado fallecido CORTES SÁNCHEZ, elevó solicitud pensional ante COLPENSIONES, y dicha entidad mediante comunicado N° BZ 2015_8274996 del 1 de diciembre de 2017 (fls.36), la requirió para que anexara una serie documentos y gestionara el formulario correspondiente, para poder estudiar su solicitud pensional.*

Por lo tanto, procederá la Sala a analizar el primer problema jurídico planteado, esto es, si este afiliado dejó causado o no el derecho pensional en favor de sus eventuales beneficiarios, al respecto debe tenerse en cuenta lo previsto en el numeral 2° del art. 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 12 de la ley 797 de 2003, que era la normatividad vigente al momento del fallecimiento del afiliado CORTES SÁNCHEZ, veamos:

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento...**”

Teniendo en cuenta la densidad mínima de cotizaciones exigida en el citado precepto legal, esta Sala procedió a revisar la historia laboral más actualizada del afiliado, aportada en medio magnético por COLPENSIONES, encontrando que el señor CORTES SÁNCHEZ, tenía en su haber cero (0) semanas cotizadas entre el 9 de octubre de 2011 y el 9 de octubre de 2014, esto es en los 3 años anteriores a su deceso.

En ese orden de ideas, podría decirse en principio, que el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional a favor de sus eventuales beneficiarios en aplicación del art. 46 de la ley 100 de 1993 modificado por el art. 12 de la Ley 797 de 2003, y por ello se pasará a estudiar, si este derecho se causó en aplicación del principio constitucional de la condición más beneficiosa que se solicita en la alzada.

El principio de la condición más beneficiosa

Frente al tema, debe recordarse que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha definido el criterio de aplicación del principio de condición más beneficiosa, explicando que, al ser excepcional, su aplicación, necesariamente, es restringida y temporal, es decir, que no es dable emplearla con un carácter indefinido. Ha explicado la Corte que, en los casos en que la contingencia (en este caso la muerte) acontece en vigencia de la Ley 797 de 2003 y se pretende la aplicación de dicho principio no resulta admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pasado en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Esta tesis ha venido sosteniéndose, refrendándose y reiterándose por la Sala Laboral de la Corte en las sentencias rad. 32.642 del 9 de diciembre de 2008, SL7275-2015, SL7205-2015, SL6362-2015 y la SL4650-2017 – con radicación N° 45.262 del 25 de enero de 2017.

En esta última providencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejó en claro que solo era posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jurídicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa legítima, para garantizar y proteger, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la égida de la condición más beneficiosa. Después de allí no sería viable su aplicación, pues este principio no puede convertirse en un obstáculo de cambio normativo y de adecuación de los preceptos a una realidad social y económica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser dinámico, jamás estático. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. Estimó la Corte que no podía pasarse por alto que esta franja de tres años, a más de tornarse razonable y

proporcional favorece, a quienes tenían dicha situación concreta al momento del tránsito legislativo.

En síntesis, de acuerdo con el criterio jurisprudencial abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no resulta procedente aplicar el principio de la condición más beneficiosa para aplicar una norma distinta a la inmediatamente anterior, dado que el causante falleció en fecha posterior al 29 de enero de 2006.

No obstante, y si bien el órgano de cierre en la especialidad laboral es la Corte Suprema de Justicia, esta Sala de Tribunal no desconoce la tesis que de manera simultánea, ha venido sosteniendo la CORTE CONSTITUCIONAL frente al principio de la condición más beneficiosa, en innumerables sentencias, donde ha expresado su criterio frente al tema, sosteniendo que, no solo la norma pensional vigente (Ley 797 de 2003) o la inmediatamente anterior (Ley 100 de 1993), sino incluso la antecedente a esta última (Decreto 758 de 1990) puede aplicarse a una solicitud de pensión de sobrevivientes, en la medida en que la persona haya cumplido con la densidad de semanas de cotización previstas en este último antes de expirar su periodo de vigencia. (Ver entre otras las sentencias T-401 de 2015, T-464 de 2016, T-084 de 2017, T-235 de 2017, T-294 de 2017 y T-378 de 2017, criterio jurisprudencial del que solicita su aplicación la parte recurrente, toda vez que afiliado fallecido registra en su historia laboral con más de 300 semanas cotizadas al 1° de abril de 1994 (613,72 semanas – incluido el tiempo público al servicio del Ministerio de Defensa Nacional), satisfaciendo así la densidad mínima de cotizaciones que otrora exigía el acuerdo 049 de 1990.

No obstante, mediante la sentencia **SU-005/18**, la Corte Constitucional realizó un ajuste jurisprudencial a la interpretación del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes, introduciendo un **TEST DE PROCEDENCIA** que permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por lo que se establecieron CINCO (5) CONDICIONES para poder superar el test de procedencia, a saber:

Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
Cuarta condición	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.
Quinta condición	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Y por ello pasa la Sala a determinar, si la demandante logra satisfacer tales exigencias.

PRIMERA CONDICIÓN: Para acreditar esta condición se requiere que la demandante pertenezca a un grupo de especial protección constitucional o se encuentre en uno o varios supuestos de riesgo, y como bien lo advirtió el apoderado judicial de la demandante en su recurso de alzada, la señora ROSAURA FRANCO ARANGO contaba con 74 años de edad para el mes de octubre de 2014, en que falleció su compañero permanente CORTES SÁNCHEZ, tal y como se prueba con su documento de identidad (fls. 12) que da cuenta que la actora nació el día 15 de julio de 1940, resultando así notorio que la demandante era una mujer de avanzada edad, esta en el grupo de la vejez, que según la Corte Constitucional es un supuesto de riesgo con el que se satisface la exigencia jurisprudencial, no desconoce la Sala que la demandante tuviere otros riesgos como el de la enfermedad, no obstante, con la demanda

no se allegó historia clínica que permitiera acreditar idóneamente tal situación, pero el solo riesgo de la vejez le era suficiente para dar por probada la primera condición.

SEGUNDA CONDICIÓN: esta alude a la situación socio económica en la que quedo la demandante, luego de ocurrido el fallecimiento del causante, y según lo relataron los testigos y lo pudo corroborar el *A Quo* con la consulta realizada en las bases de datos para verificar si la demandante era beneficiaria de una prestación económica, que la actora en la actualidad no cuenta con ninguna pensión, tampoco percibe un ingreso económico del que pueda derivar su auto sostenimiento económico, y que además su avanzada edad, la deja al margen del mercado laboral, comprometiéndose así la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y una vida en condiciones dignas, pues sobrevive de las ayudas que le provee una de su hijas.

En consecuencia, estima la Sala, que la segunda condición también se encuentra acreditada en el sub lite.

TERCERA y CUARTA CONDICION: al respecto, estima la Sala que de la prueba testimonial practicada en el plenario compuesta por la declaración de los señores LIDIA EMILIA CASTILLO IZQUIERDO (vecina y amiga de la demandante) y JORGE WILMAR GARCÍA VÁSQUEZ (yerno de la demandante), solamente se logra acreditar la CUARTA CONDICIÓN del TEST DE PROCEDENCIA, esto es, que el señor ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.

Pues según lo relataron los testigos, el afiliado fallecido sufrió una penosa enfermedad a la que el testigo JORGE WILMAR GARCÍA VÁSQUEZ denominó "TROMBOSIS" que lo postro en una cama en últimos 4 o 6 años

anteriores al fallecimiento, y a partir de ese momento empezó a depender económicamente de su compañera permanente e hijas de crianza, quienes lo cuidaron durante la enfermedad.

Sin embargo, el cumplimiento de esta CUARTA CONDICION, deja sin sustento la TERCERA CONDICIÓN del Test de Procedencia, según la cual debe establecerse que la demandante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante.

Y al ser ello así, es evidente para esta judicatura, la existencia de una contradicción insoslayable entre ambas condiciones, misma que lleva a dar por no acreditada la TERCERA CONDICIÓN establecida en la sentencia SU-005 de 2018, pues si está demostrado que el afiliado fallecido ALBERTO DE JESÚS CORTES SÁNCHEZ, no realizó ninguna actividad económica en los últimos 4 o 6 años de vida, por estar postrado en una cama producto de una penosa enfermedad "TROMBOSIS", no resulta creíble para la Sala, que este afiliado enfermo, fuese la persona que asumiere los gastos y el sostenimiento del hogar conformado con la demandante para el mes de octubre de 2014, máxime que se encontraba desempleado, tampoco percibía una pensión de vejez o invalidez, o propiedades que le generasen renta, y si bien había formado una famiempresa dedicada a la fabricación y venta de "MUÑECAS DE TRAPO", tal actividad ya no la podía ejercer debido a su estado de salud, y fue asumida o heredada por una de sus hijas de crianza, quien continuo con la elaboración y venta de estas manualidades, tal y como lo manifestaron los testigos, especialmente el señor JORGE WILMAR GARCÍA VÁSQUEZ, quien le revelo al a quo que cuando afiliado se enfermó, paso a depender económicamente de la demandante y de su hija gloria.

Finalmente, esta Sala da por probada la **QUINTA CONDICIÓN** del Test de Procedencia, pues el trámite administrativo y judicial adelantado ante COLPENSIONES da cuenta de ello, inclusive la demandante realizó varias

gestiones tendientes a la corrección de la historia laboral del afiliado fallecido, y valiéndose de derecho de petición, consiguió la certificación del tiempo público laborado por el causante al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, todo ello en procura del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Corolario de lo anterior, si en el mejor de los casos esta Sala avalara la aplicación del principio de la condición más beneficiosa con el doble salto normativo al acuerdo 049 de 1990 como se pretende en la alzada, debe decirse que la demandante no supera el Test de Procedencia establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005 de 2018, cuyas condiciones son concurrentes entre sí, esto es, que se deben acreditar las cinco (5) condiciones a la vez para poder acceder al beneficio del doble salto normativo. Es por lo anterior que esta Sala confirmará la sentencia absolutoria de primer grado, pero por las razones aquí expuestas.

Sin costas en esta instancia, acogiendo las mismas consideraciones expuestas por el juez de primer grado.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia objeto de apelación de fecha 16 de diciembre de 2019, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin Costas en esta instancia.

TERCERO: Se ordena la notificación por **ESTADOS** de esta providencia, la devolución del proceso al juzgado de origen y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **106** del **21 de junio de 2021.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>